Cultura de paz y procesos de memoria en El Salvador

Mujeres, participación y ciudadanías

Mirella Guadalupe Hernández Ramírez
Universidad Pedagógica Dr. Luis Alonso Aparicio, El Salvador
mhernandez@pedagogica.edu.sv
<https://orcid.org/0009-0009-4938-9241>

Introducción

Nacer en El Salvador es vivir en un territorio de voces silenciadas, de olvidos intencionados y recuerdos fragmentados, donde la historia reconoce, aún de forma tímida y con grandes esfuerzos, las luchas y conflictos que la población ha enfrentado durante diferentes épocas para ser escuchada y reconocida en sus derechos. Se calcula que durante la guerra civil en El Salvador se perdieron alrededor de 75 000 vidas; de estas, el 80 % eran civiles, 9000 personas son reportadas como desaparecidas, aproximadamente medio millón fueron obligadas a desplazarse internamente y alrededor de un millón a salir del país (Organización de las Naciones Unidas, 1993).

A pesar de las evidencias que confirman la existencia del conflicto armado, en pleno siglo XXI y después de 40 años de concluida la guerra civil, se continúa negando el acceso a la verdad para las víctimas y sobrevivientes, rechazando la existencia no solo de lo ocurrido sino también del “otro”, de ese próximo que existe y que tiene sus propios recuerdos y

experiencias que poco a poco emergen a través de una voz tímida, a pesar de los discursos de perdón y olvido que buscan callar cualquier expresión que pretenda el esclarecimiento, como si este fuera un tema del pasado que no merece la pena ser reconocido.

Al firmar los Acuerdos de Chapultepec, 1992 (de aquí en adelante se denominarán Acuerdos de Paz), se aprueba la entrada en vigencia de la Ley de Amnistía, ahora llamada Ley de Reconciliación Nacional, que exime a los responsables de delitos políticos o conexos cometidos durante la guerra civil, creando un escenario jurídico que legaliza la impunidad y los actos violentos; una sociedad donde agresor y víctima conviven dentro de una “cultura de paz” débil, que no soporta el más mínimo atisbo de verdad que permita esclarecer el pasado y, de esta forma, dar sentido a una historia que ha vivido pausada; porque ante cualquier intento de reconocimiento se activa toda una estructura discursiva que obliga a la población a situarse en bandos, donde, dependiendo de la perspectiva de quién cuenta el hecho, eres el bueno o el villano, erosionando así aún más el tejido social del país, ya que divide a la población y se construyen figuras de “enemigos” que permiten ser el chivo expiatorio y, así, nunca se cuestionan las causas que llevaron y mantuvieron el conflicto.

Mientras tanto, las personas sobrevivientes intentan construir una nueva vida en el mismo espacio donde perdieron de forma violenta y sistemática a sus amigos, familiares y compañeros, con una identidad resquebrajada y con el anhelo de poder vivir en libertad sin miedo a la muerte. Así, el escenario de la posguerra se ha caracterizado por la construcción de nuevas relaciones sociales que cargan no solo un pasado violento sino también confuso, y con una gran deuda de respeto a los derechos humanos, donde el silencio impuesto solo hizo que se incrementaran los hechos de violencia, se conformarán nuevos grupos delictivos y se consolidara una cultura del olvido, que fragmenta el débil sistema democrático instaurado después de la firma de los Acuerdos de Paz.

Dentro de este contexto de negación de las consecuencias de la guerra en la sociedad salvadoreña, se vuelve necesario e impostergable

estudiar las memorias que existen en torno al conflicto armado; porque vivir en El Salvador es aferrarse a la esperanza para no sucumbir ante las narrativas que buscan polarizar la opinión de la población, medida que permite ocultar el irrespeto que el Estado hace al cumplimiento de los derechos humanos, todo esto dentro de un marco legal que, en lugar de proteger y garantizar el respeto a la dignidad humana, limita el acceso al sistema de justicia y a la verdad.

Estudiar la memoria del conflicto armado de El Salvador es un esfuerzo por visibilizar y reconocer las diferentes miradas, comprensiones y discursos que existen en torno a la guerra civil; en este caso se abordará desde la óptica de las mujeres, porque la guerra narrada desde la mujer es diferente, en sus voces se encuentran los tejidos de los lazos construidos, los anhelos suprimidos, las identidades transformadas; su descripción trasciende a los hechos de violencia o al recuento de los operativos donde participaron. No se trata únicamente de recordar los hechos, sino de comprender las formas: cómo dentro de estos escenarios de violencia e inseguridad se fueron construyendo identidades, subjetividades y roles. Los caminos que llevaron a las mujeres a la guerra son distintos; algunas de ellas se incorporaron de manera fortuita a las luchas; otras, buscando alcanzar un ideal de justicia social para el país. Independiente de las razones, es necesario transitar por los significados que se generan en torno a este evento traumático, como plantea Romero *et al.* (2022, p. 74) en sus discursos se encuentra la construcción de subjetividades que transformaron su ser mujer, que fue edificado en la clandestinidad, sobreviviendo a los operativos y las persecuciones. Para algunas, la guerra significó el dolor de ver crecer a sus hijos e hijas desde la distancia; para otras, son los amores que recuerdan en medio de las balas, la sorpresa y el orgullo que causa el reconocerse valiente e intrépida, o el vacío que deja la pérdida de amigos, compañeros o familiares. Es presenciar el surgimiento de los recuerdos desde los sentidos, con una mezcla de olor a pólvora, sangre y sudor.

De acuerdo con Vásquez *et al.* (2020, p. 28) durante el conflicto armado de El Salvador se reportan 13 600 combatientes guerrilleros del FMLN; de estos, el 30 % eran mujeres. Ellas eran asignadas para ejercer los roles de radistas, vivanderas, brigadistas, salud, correos, guerrilleras de combate, organización de masas, entre otros. En su mayoría eran destinadas a las actividades de cuidado, eran pocas las mujeres que formaban parte de la milicia armada; las que lograron participar dentro de la milicia, se encontraron asumiendo tareas y realizando actividades que parcialmente les permitían posicionarse en igualdad de condiciones con los hombres, generando la percepción que dentro de la guerrilla eran iguales y esto daba sentido a la lucha armada, porque se combatía para cambiar las estructuras sociales que asfixiaban el desarrollo de la población.

Los datos que registran la participación de la mujer dentro de la guerra civil son confusos porque no fueron sistematizados ni contabilizados, como si al hablar de guerrillero diera lo mismo si era hombre o mujer, pero las relaciones que se establecieron dentro del conflicto armado estuvieron mediadas por las concepciones de género. La mujer nunca participó en condiciones de igualdad dentro de la guerrilla; aunque su identificación y compromiso con la lucha armada fueron notables, esto no derivó en un reconocimiento a su trabajo, negándoles protagonismos políticos, subordinándolas e invisibilizándolas; porque la guerra representa formas de reproducción de violencia y poder que exige la adopción de roles, comportamientos y sentimientos asociados a la masculinidad y feminidad; reforzando las identidades desde los estereotipos de género. Esto dificultó el reconocimiento de la proporción de mujeres que formaron parte de la lucha armada. El Informe de la Comisión de la Verdad estima que, de las 8552 personas combatientes del FMLN que fueron oficialmente desmovilizadas, las mujeres constituían casi el 30 % (2485) (Viterna, 2014). Los Observadores de las Naciones Unidas (1994) estimaron que el FMLN contó con 15 009 miembros; de estos, se considera que un 30 % fueron mujeres (4492). Además, de las “100 000 personas movilizadas en la base social de apoyo en diferentes funciones, el 60 % eran mujeres” (Luciak, 2001, p. 51). Sin embargo, los datos de un reciente

censo de excombatientes publicado por el Gobierno de El Salvador, en 2012, indican que tanto el número de combatientes en el FMLN como la proporción de mujeres entre sus filas era mayor; el nuevo censo oficial recoge 25 401 excombatientes del FMLN, de los cuales 14 440 (el 57 %) eran hombres y 10 961 mujeres (el 43 %) (Arbaiza, 2012).

Las mujeres salvadoreñas durante el período del conflicto armado participaron e incidieron de diferentes formas; sus estilos organizativos estuvieron marcados por la zona de procedencia y clase social; así, las mujeres de la zona rural se incorporaron más por razones de miedo, inseguridad y la pérdida de sus familiares; mientras que en los motivos de las mujeres de la zona urbana se identifica una convicción política e ideológica, aunque también vivieron el miedo y fueron víctimas de las diferentes formas de violencia que ejercía el Estado (Navas, 2013 p. 45).

Relaciones de género y conflicto armado

La palabra género comenzó a ser utilizada y posicionada por los movimientos feministas, que señalan que es un medio para subordinar a las mujeres. El mecanismo que utiliza es la naturalización a través del lenguaje, generando creencias compartidas que se objetivan mediante pautas que se hacen hábitos y se consolidan en formas de comportamiento; es decir, primero es aprendido por hombres y mujeres, casi de forma inadvertida, en las relaciones cotidianas, convirtiendo las diferencias biológicas en diferencias culturales que son usadas como mecanismos de control; el sexo y la sexualidad humana se transformaron en territorios en disputa que deben de ser controlados con violencia. La epistemología feminista ha permitido comprender cómo por medio del género se han construido imaginarios y representaciones sociales que se reproducen en la cotidianidad, de forma silenciosa y sistemática, colocando al margen de las decisiones políticas y económicas a la mujer; pero ¿por qué las mujeres no son incluidas en condiciones de igualdad dentro de la dinámica de la vida ciudadana?, ¿por qué no tienen igual acceso a sus derechos?

Para responder a estas preguntas es necesario analizar y cuestionar los parámetros culturales que naturalizan estas formas de exclusión; el patriarcado representa un sistema de valores, creencias y tradiciones que refuerzan y reproducen la dominación del hombre sobre la mujer; desde el patriarcado el hombre es reconocido como sujeto absoluto, completo, pero la mujer no; ella es comprendida como un ser incompleto que debe ser dotado de sentido y significado. Porque nacer mujer no basta: debe ser reconocida como mujer desde el mundo social y cultural, mundo que es dominado por el hombre.

Para estudiar las asimetrías de poder que se instauran en las relaciones de mujeres y hombres es necesario trascender a las explicaciones biologicistas y comenzar a reconocer las diferencias que surgen desde el mundo cultural a través del patriarcado, comprendiéndolo como un sistema de dominación, estructurado y jerarquizado, en el que hombres y mujeres ocupan determinados puestos y cumplen funciones específicas; por lo tanto, es necesario estudiar las relaciones de interdependencia que se establecen entre las jerarquías, porque entran en juego la clase, la raza, la nacionalidad, el estado civil, la orientación e identidad sexual. Desde esta perspectiva, las formas de dominación y desigualdad entre las poblaciones que se encuentran en situación de vulnerabilidad, no son iguales, varían de acuerdo a factores sociales que generan escenarios y dinámicas donde se perpetúan patrones culturales de violencia y exclusión; no se trata de generar una clasificación sobre cuál es la población que sufre más formas de violencia, sino de comprender el funcionamiento de los engranajes socioculturales que construyen subjetividades e identidades desde la dominación.

Abordar la memoria colectiva de la guerra civil en El Salvador desde un posicionamiento de género permite reconocer y explicar las desigualdades persistentes, no solo desde la relación entre la historia masculina y femenina del pasado, sino también la conexión de ellas con el presente; porque a través del género se aprende el uso del poder que es ejercido de forma inequitativa entre mujeres y hombres, porque el poder que es

otorgado a las mujeres no ha sido concebido para utilizarse en la vida pública, sino en el ámbito privado, con los hijos e hijas, reduciéndose su accionar a lo doméstico; estableciéndose así un sistema complejo de relaciones que organiza la vida social y, por lo tanto, las subjetividades de las personas, porque esas diferencias no son determinadas por lo biológico sino por lo social (Scott, 1990, p. 19).

El género es un elemento central en la construcción de ciudadanía, pues posibilita la comprensión de los parámetros sociales y culturales que han contribuido a su establecimiento y modos de reproducción, que transita a través de las relaciones cotidianas que permiten o limitan los niveles de participación, incidencia y toma de decisiones (Trimiño, 2014, p. 65). Las creencias, conductas, emociones y patrones de comportamiento, que han sido construidos en el ámbito público y privado, son producto de modelos económicos, políticos, sociales y culturales que tienen como denominador común concepciones patriarcales, desde las que se busca mantener ejercicios desiguales de acceso al poder, que son aprendidos como formas relacionales naturales; por lo tanto, no suelen ser cuestionados, sino que se presentan como la única forma posible de vida social, conformando así cosmovisiones que autorregulan la conducta al homogenizar e imponer un orden social basado en la inequidad.

La forma en que mujeres y hombres vivieron y experimentaron el conflicto armado en El Salvador es diferente, porque sus recuerdos, interpretaciones, el impacto e, incluso, el reconocimiento social que recibieron, está vinculado a su género; los contextos de conflicto tienden a reforzar las concepciones de género a través de discursos y prácticas de socialización que se fundamentan en disciplinar y controlar a quienes se encuentran en posición de subordinación; en este caso, las mujeres al incorporarse a la lucha armada no entraron en condiciones de igualdad frente a los hombres, ni siquiera fueron reconocidas las inequidades que ellas enfrentaban previo al conflicto armado; más bien, fueron identificadas desde la pertenencia a una clase social —la trabajadora—, pero no se llegó a considerar la posibilidad de que el levamiento en armas de la

sociedad civil también buscara exigir el respeto de los derechos de las mujeres (Vásquez *et al.*, 2020, p. 93).

La guerra es el escenario donde más se consolida la adquisición de estereotipos de género, porque esta no solo busca el control de los territorios con el uso de los medios bélicos, sino también dominar la intimidad, la vida y el cuerpo de las personas (Cifuentes, 2009, p. 145). Es el escenario donde se instaura el ejercicio de masculinidades hegemónicas, donde los hombres, mediante la violencia, establecen su prestigio y ejercen su poder, dejando a las mujeres al margen, porque desde una mirada patriarcal es el hombre quien domina este terreno, ya que debe luchar por demostrar su virilidad, honor y fuerza; sin importar todo el dolor que deba soportar, este debe demostrar —ante todo— su virilidad; mientras que la mujer debe ser protegida, no solo por ser considerada como un ser delicado con menos fuerza física, sino por su capacidad biológica de reproducirse y alimentar a nuevas generaciones de guerreros o trabajadores. Por lo tanto, la exclusión de las mujeres de la esfera militar no es producto de su incapacidad de lucha, sino por su capacidad de crear vida (Malešević, 2015, p. 5).

A pesar de que dentro de los imaginarios socioculturales la guerra es un espacio prioritariamente masculino, la mujer ha tenido participación dentro de este escenario; como lo plantea Garrido (2020):

las mujeres han sido víctimas sobrevivientes, victimarias enroladas en grupos armados o sujetas políticas; este último, ha sido la forma más reducida de participación, no por falta de compromiso o trabajo de la mujer, sino por la subordinación que vive por su género. (p. 82)

Las mujeres, al participar dentro de la guerra, lo hacen “manteniendo los mandatos de la feminidad” (Vásquez, 2020, p. 95) mientras luchaban por erradicar las causas que mantenían las inequidades y la falta de acceso al desarrollo, ingresaban a un espacio de microviolencia, donde las mismas causas que buscaban erradicar eran las que ordenaban las relaciones entre sus miembros; aunque los principios de la guerrilla

parecían no tener diferencia entre mujeres y hombres, en la práctica eran asignadas a tareas de cuidado, en contraparte con las actividades que realizaban los hombres; se apelaba a la abnegación y el sacrificio por los otros, el prototipo femenino de madre.

Procesos de memoria

La sociedad salvadoreña está conformada por un abanico de voces que aún buscan ser reconocidas, ansiosas por esclarecer el pasado, pero a la vez con temor de recordar, porque las generaciones crecen desconociendo su historia, su identidad y sobre todo sus derechos. Recordar es un proceso de reconstrucción, como plantea Jelin (2002, p. 13) consiste, por una parte, en “ubicar temporalmente las experiencias que son reconocidas, en primera instancia, como personales” (memoria individual), pero, en la medida que son objetivadas, verbalizadas y escuchadas junto a otros, se comienzan a transformar en relatos compartidos, trascendiendo del plano individual al plano colectivo, facilitando que las personas puedan reconocerse en y desde el otro, volviendo la memoria personal en memoria colectiva. Hablar de la memoria requiere partir de las vivencias y voces de las personas sobrevivientes, de ese cuerpo diverso y amorfo de contextos plurales; también implica tener en cuenta los datos presentados desde la historia oficial, pero analizados desde otras perspectivas. Es así como la memoria histórica pasa de ser un cúmulo de datos y fechas, que se recuerdan para señalar la existencia de un pasado común y en cierta forma impersonal, a convertirse en un espacio de reflexión, encuentro y reconocimiento de una identidad social, que ha marcado la conformación de un imaginario desde la narrativa de la población.

Como expresa Halbwachs (2004) la memoria histórica es un “listado de acontecimientos que permiten tener puntos de referencia; las personas comparten así información, pero esta puede ser una experiencia despersonalizada” (p. 21). Para que esa información se convierta en una fuente de construcción de identidad requiere ser percibida como cercana, como parte del pasado individual; es decir, debe tener un significado que

permita vincular los acontecimientos de los “otros” con los míos; parte del reconocimiento de diferentes memorias que comparten puntos de encuentro, pero que no buscan imponerse como interpretaciones totalizadoras, sino ser observadas desde su particularidad, convirtiéndose en memorias colectivas.

El Salvador necesita recordar las “memorias” que tiene de la guerra no como un proceso aislado e individual, sino como un acto de comunicación social, que permita a sus habitantes rememorar el pasado para integrarlo al presente, para que el olvido impuesto institucionalmente no continúe condenando a sus habitantes a un vacío traumático, que constantemente agrieta la débil paz que se logró conseguir con la firma de los Acuerdos de Paz. Pero el reto aún es mayor: se trata de construir las memorias desde un enfoque de género que permita comprender los significados y simbolismos que mujeres y hombres participantes dentro del conflicto armado construyeron, porque, como menciona Jelin (2002):

los recuerdos en contextos de guerra y dictadura están masculinizado; las estrategias de represión son ejecutadas por una institución masculina y patriarcal, que identifica lo masculino con la dominación y la agresividad, mientras delega a lo femenino una superioridad a nivel espiritual, dotándolas de características de docilidad y sumisión frente a los deseos del hombre. (p. 103)

Para poder comprender estos simbolismos detrás de la historia es necesario realizar una lectura desde el género.

La ausencia de procesos de memoria, desde una mirada de género, profundizó aún más la reproducción de ejercicios de poder asimétricos durante el proceso de la posguerra; así lo explica Vásquez *et al.* (2020, p. 100), al señalar que la carencia de una perspectiva de género dentro del “ideario revolucionario exigió a las mujeres comportamientos iguales a los hombres, pero en condiciones de desigualdad; en ellas era más valorada su obediencia, abnegación, sacrificio por los otros y aceptación de las normas masculinas”, que su capacidad para ocupar puestos de mando; la no participación en actividades militares, de la mayoría de

mujeres guerrilleras, fue una situación impuesta; los hombres eran quienes participaban dentro de las estructuras militares y las mujeres en las actividades de apoyo.

Terminado el conflicto se espera que las mujeres se comporten como sujetos afirmados, capaces de reclamar sus derechos y de expresarse clara y abiertamente, misión bastante difícil después de doce años de haber utilizado con fines políticos la victimización y sumisión aparentes, prácticas que, de alguna manera, han quedado registradas como parte de la experiencia vital de estas mujeres y motivo de su valoración (Navas, 2013, p. 32).

Las exguerrilleras, al terminar el conflicto armado, se encuentran frente a una sociedad salvadoreña que se prepara para iniciar una nueva etapa de funcionamiento con instituciones que buscan garantizar el acceso a un sistema de vida democrático, pero que, en el fondo, no han transformado los mecanismos estructurales que reproducen las condiciones de desigualdad por las cuales lucharon durante la guerra. Después de la firma de los Acuerdos de Paz inicia el proceso de transición a la vida civil; al desmovilizarse enfrentaron una realidad difícil donde prevalecían los estereotipos de género, y las opciones que el Estado les brindó para reintegrarse solamente reforzaban su rol de cuidadora; las mujeres quedaron en segunda fila de los programas de reinserción social, los que fueron diseñados y aplicados con una lógica masculina; no tuvieron acceso a la tierra repartida, pues incluyeron únicamente a los “jefes” de familia. “Las mujeres que participaron en la guerrilla urbana al no lograr desmovilizarse no calificaron para obtener los beneficios de acceso a becas y créditos” (Aguñada, 2001, p. 108).

Para aquellas mujeres que eran madres, la situación fue mucho más compleja porque regresaron a un hogar donde sus hijos e hijas no las reconocían como figuras maternas, porque la distancia que impuso la guerra entre ellos impidió la construcción de ese vínculo afectivo; fueron tratadas como “traidoras a su familia” por haber elegido la lucha revolucionaria. En cambio, los hombres fueron recibidos como “héroes de guerra”. “Las necesidades y derechos de las mujeres no fueron considerados ni

tomados en cuenta al pensar en un nuevo sistema social que permitiera la tan anhelada paz” (Navas, 2007, p. 2).

Rutas ciudadanas de las mujeres

Las mujeres siempre han participado en la vida política, económica y social del país, pero sus aportes han sido minimizados, en el mejor de los casos, cuando no anulados de la historia oficial, negándoles el protagonismo y el reconocimiento a las contribuciones que dieron para la construcción de una sociedad más justa y equitativa, invisibilizando su ejercicio ciudadano y liderazgo, pero, sobre todo, sus aportes para el logro de la firma de los Acuerdos de Paz; como explica Murguialday (1996, p. 34) “los acuerdos fueron un pacto entre caballeros”, invisibilizando sus luchas, pérdidas, necesidades y contribuciones al conflicto armado. La participación de las mujeres fue asociada a las tareas de cuidado y asistencia, pero ellas también contribuyeron en la defensa de los territorios, la negociación de los acuerdos y, sobre todo, en la denuncia de los casos de violación de los derechos humanos.

Una de las preocupaciones que enfrentó la sociedad salvadoreña con la participación de las mujeres en espacios políticos y públicos fue su posible masculinización; esto supondría un abandono de los deberes familiares y un libertinaje sexual, porque se consideraba que, al organizarse, automáticamente la mujer adoptaría roles que solo eran permitidos a los hombres, renunciando al único espacio donde era reconocido el ejercicio de poder de la mujer: el hogar, mediante actividades de cuidado a sus hijos. Cuando las mujeres se incorporan a la lucha política y militar tienen necesidades reivindicativas de género, pero estas se ponen de lado y se enfocan en trabajar en la lucha contra el sistema oligarca, esperando que al cambiar la realidad social del país también mejoraría su condición como mujer, pero eso no pasó.

Las mujeres salvadoreñas no solo se organizaron a través de los movimientos guerrilleros durante el conflicto armado, fueron las primeras

propulsoras de los movimientos sociales a favor de los derechos humanos, como se rescata en la investigación de Guzmán y Mendia (2013) donde describen cómo las mujeres siempre estuvieron participando:

En los ámbitos de la vida política y social del país, en clubes, comités partidarios, sindicatos artesanales y obreros; durante estas luchas, las mujeres crearon organizaciones propias que buscaban las reivindicaciones vinculadas a la lucha de clases, pero aún no tenían definidas las luchas por las condiciones de disparidad de género. (p. 26)

En un contexto social carente de garantías y respeto por la vida, han sido ellas quienes tomaron la primera línea de defensa y denunciaron los abusos que cometía el Estado hacia la población; fue a raíz de la masacre de estudiantes de la Universidad de El Salvador, el 30 de julio de 1975, que surgió el primer Comité de Madres y Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Asesinados Políticos (COMADRES): las mujeres se organizaron para exigir una respuesta al Estado salvadoreño sobre el paradero de sus hijos. El 3 de agosto de 1975, salieron a marchar más de mil mujeres vestidas de negro, acompañando el entierro de 27 estudiantes. Tres años después, COMADRES dio origen a la Comisión de Derechos Humanos No Gubernamental de El Salvador (CDHES), organización que se convertiría en uno de los referentes en la defensa de los derechos humanos, desde ese momento y durante la década de 1980.

La CDHES fue fundada y presidida por una mujer. En la comisión se recibían diariamente denuncias de familiares de personas detenidas, asesinadas o desaparecidas, permitiendo llevar un registro de lo sucedido; al participar en estos espacios organizativos las mujeres sufrieron de la persecución y represión estatal, como puede observarse en el siguiente texto:

Marianella García Villas, presidenta de la CDHES y vicepresidenta de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), fue detenida ilegalmente y torturada en dos ocasiones; la primera, por la Policía Nacional, a tan solo un mes después de haberse fundado CDHES y, la segunda, por la Guardia Nacional, dos meses más tarde. El 14 de marzo de 1983, fue asesinada por el Ejército cuando este emboscó a un grupo

de pobladores en el Valle La Bermuda, que huían del bombardeo en la operación denominada “Guazapa 10”, donde más de 70 personas fueron asesinadas. (Guzmán y Mendia, 2013, p. 38)

Al finalizar la guerra, comenzaron a participar en espacios internacionales donde se discute sobre inequidades de género y a trabajar con organizaciones feministas, generando discusiones sobre la situación de la mujer salvadoreña; sumado a esto, regresan las mujeres que fueron obligadas a abandonar el país y que durante su exilio estuvieron trabajando con organizaciones que promovían el respeto a los derechos de las mujeres, iniciando así una nueva etapa de organización, pero aún sin definirse como feministas (Navas, 2013, p. 99).

Las primeras organizaciones feministas en aparecer en la escena pública fueron Las Dignas y Las Mélicas, originalmente fundadas por militantes del FMLN. Las Dignas fueron creadas por mujeres que formaron parte de la Resistencia Nacional, mientras que Las Mélicas se crearon con el esfuerzo de mujeres leales a las Fuerzas Populares de Liberación (FPL). Los grupos de mujeres creados por el FMLN se utilizaban a menudo para asegurar fondos por parte de agencias de desarrollo interesadas en apoyar la organización de las mujeres. Esos fondos, sin embargo, los controlaba la dirección del partido y era quien decidía sobre su uso. Las militantes se resistieron a que se las tratara como fichas para recaudar fondos para las arcas del partido; Las Dignas fue el primer grupo en separarse y se volvieron fervientes defensoras de su autonomía. Las Mélicas declararon su independencia de las FPL, un par de años más tarde. A diferencia de Las Dignas, Las Mélicas siguen activas dentro del FMLN (Luciak, 1998, p. 694).

Los estudios que se han realizado sobre la participación de las mujeres durante la guerra civil en El Salvador muestran la necesidad de realizar un abordaje de la temática desde la perspectiva de género, para poder reconocer cómo las creencias socioculturales que existen en torno a la mujer estructuraron y limitaron su trabajo, colocándolas en una posición de subordinación donde no se reconocían sus aportes; su actuar dependía de la aprobación de las estructuras de poder que estaban con-

formadas en su mayoría por hombres, eran otros los que decidían sobre su cuerpo y su vida; “la obediencia era valorada como la mayor cualidad de un miembro de la guerrilla porque supeditaba sus necesidades a los valores de la lucha armada” (Vásquez *et al.*, 2020, p. 107).

Solo en la medida en que se reconozcan las inequidades que han enfrentado las mujeres durante la historia de la guerra y posguerra en El Salvador se podrá garantizar la igualdad de acceso a los derechos, para comenzar a transitar a condiciones de vida democrática que promuevan la construcción de cultura de integración y paz, comenzando por garantizar la igualdad formal, que se puede lograr por medio de la legislación, y la igualdad sustancial, que aspira a poder lidiar con las relaciones entre individuos en diferentes posiciones originales (Parvikko, 1991, citado en Luciak, 1998, p. 620).

Cultura de paz

Al firmar los Acuerdos de Paz, El Salvador hace una pausa al conflicto armado, cesan los enfrentamientos bélicos y la vida clandestina; tanto militares como guerrilleros se encuentran desarmados uno frente al otro, ese otro que aún es considerado un enemigo; dentro de un escenario de desconcierto y desconfianza intentan retomar la vida que una vez dejaron en pausa; aún no saben si la firma de ese acuerdo evitará realmente un nuevo alzamiento en armas, pero tanto la guerrilla como el ejército reconocen que no es posible obtener un triunfo militar. El conflicto cambia de escenario, deja la guerra y ahora se instala dentro de un espacio de vida democrático; las causas que originaron ese conflicto continúan latentes, por lo tanto, aún no hay paz, solo un nuevo escenario donde se realiza el enfrentamiento, utilizando canales y medios legalmente establecidos. Entonces, dependerá de la astucia de cada bando la forma en que instrumentalice las instituciones democráticas para conseguir sus objetivos.

La cultura de paz no parte de la negación del conflicto, reconoce que existe y está conformado por diferentes factores, por lo tanto, la paz

no es un estado inerte, sino al contrario: al hablar de paz se habla de un proceso dinámico de continuo reconocimiento del otro, donde se parte de la diversidad para poder garantizar el acceso a derechos y así satisfacer las necesidades humanas. Desde un enfoque sistémico, se reconoce que su consecución requiere de la participación de los diferentes sectores de la sociedad (económico, político, ecológico, social, educativo, cultural) (Trimiño y Amézquita, 2018, p. 112).

La paz no solo es la ausencia de conflictos armados, sino también es la ausencia de toda violencia estructural y cultural que provoca la negación de las libertades fundamentales y que condenan al subdesarrollo económico y social de los territorios; la paz no puede ser perdurable sino está sustentada de manera positiva y dinámica; “la paz es un sinónimo de respeto de los derechos fundamentales y de la libre determinación de los pueblos” (Arango, 2007, p. 16).

La violencia es una forma de privación de los derechos humanos; esto genera no solo un daño directo, como la agresión y la muerte, sino también provoca un sentimiento compartido de desesperanza que genera actitudes de apatía y abandono de los procesos de participación y organización; como plantea Galtung (1990):

la violencia puede ser directa, estructural y cultural; interesa comprender la forma en que se utiliza y se legitima, porque cuando se interioriza se vuelve aceptable para la sociedad, pasando de lo incorrecto a lo correcto o aceptable, justificando el uso de la violencia como medio para garantizar el mantenimiento de la paz. (p. 13)

El Salvador, con la firma de los Acuerdos de Paz, inició una etapa de transición desde la violencia. La adopción de un sistema democrático no garantizó la culminación del conflicto; al continuar latente este se adaptó a los nuevos escenarios. Fue así como durante la posguerra las exguerrilleras continuaron enfrentando situaciones de vulneración y exclusión que limitó su desarrollo y oportunidades de participación política y ciudadana. Como plantea Bobbio (2003) la democracia necesita de la paz para poder funcionar porque:

supone un pacto de no agresión entre aquellos que se van a asociar, parte de establecer unas normas que permiten resolver las disputas, sin usar la violencia; establece un poder común que monopolice la violencia y garantice los pactos; establece los límites que regulen el uso de esta fuerza. (p. 681)

El sistema democrático no busca por sí mismo la construcción de una cultura de paz, pero necesita que esta exista por lo menos nominalmente para poder hacer uso de la violencia por medios legítimos. A esta realidad se enfrentó la población salvadoreña durante el período de la posguerra donde observaron una disminución de los enfrentamientos armados, pero no percibieron una disminución de la violencia estructural.

Existen diferentes formas de comprender la democracia; la visión más clásica se fundamenta en la institucionalidad y los principios éticos que la sostienen; al firmar la paz se piensa que con solo la existencia jurídica de las instituciones democráticas basta, pero si no se comprenden y respetan los principios que dan sentido a su funcionamiento se genera una paz negativa, donde solo se valora la ausencia formal del conflicto, pero no se propician las condiciones que garanticen el acceso y respeto a los derechos.

La democracia y la igualdad no son familiares; si bien la democracia puede ser comprendida como un derecho, para que este derecho se ejerza en condiciones de igualdad se requiere que todos tengan la misma oportunidad de incidir y participar dentro del sistema. La democracia, al ser un sistema social, se encuentra permanentemente en disputa y puede facilitar o impedir el ejercicio de los derechos; desde los sistemas democráticos se utiliza la institucionalidad y se crean mecanismos jurídicos que limitan el acceso a los derechos; mientras, también desde allí puede crearse el contexto para una participación ciudadana que reconozca las diferentes voces de los grupos sociales. No basta la existencia de un sistema democrático para garantizar el respeto de los derechos humanos; en la actualidad, las sociedades están transitando paulatinamente a procesos de autocratización que tienen como base el fundamentalismo de mercado.

Aun, a pesar de las imperfecciones del sistema democrático, “este es el único que ha demostrado ser compatible con el respeto de los derechos humanos” (Valdés, 2020, p. 77).

Los derechos humanos no solo necesitan un cuerpo normativo que materialice su existencia, sino cuestionar los paradigmas culturales establecidos con el uso de la violencia, donde la negación y vulneración del otro es la estrategia habitualmente utilizada para imponer valores, principios y normas sociales que suelen ser comprendidas como naturales e incuestionables. Una de las teorías que ha permitido problematizar el irrespeto a los derechos humanos que viven las mujeres es el feminismo, que ha señalado el acceso desigual que tienen las mujeres a su ejercicio ciudadano.

Conclusiones

La forma en que mujeres y hombres vivieron y experimentaron el conflicto armado en El Salvador es diferente, porque sus recuerdos, interpretaciones, el impacto e incluso el reconocimiento social que recibieron están vinculados a su género; los contextos de conflicto tienden a reforzar las concepciones de género mediante discursos y prácticas de socialización que se fundamentan en disciplinar y controlar a quienes se encuentran en posición de subordinación, en este caso las mujeres. Aunque los estudios presentados permiten identificar las dificultades que enfrentaron las mujeres para poder participar en condiciones de igualdad en movimientos sociales y guerrilleros, estos aún dejan de lado el abordaje de la paz, los procesos de transición hacia la vida civil y los valores, principios y aprendizajes que estuvieron presentes durante esta etapa. Es necesario abordar las condicionantes que estructuraron la reincorporación a la vida civil de las exguerrilleras para poder comprender las transformaciones que se lograron con la lucha armada o, por el contrario, la profundización de imaginarios sociales que continúan limitando su participación ciudadana, generando de esta forma una paz nominal, que aún no logra permear las capas de las relaciones interpersonales y la cultura salvadoreña.

La firma de los Acuerdos de Paz permitió a la sociedad salvadoreña hacer una pausa e intentar comenzar un nuevo capítulo que ponía fin a un escenario de violencia sistémica; se esperaba que este hecho permitiera reconciliar a una sociedad diezmada, fragmentada y dividida por ideologías partidarias de derecha o izquierda, pero el cese del conflicto armado no trajo la tan anhelada paz que se buscaba, porque las causas estructurales que configuraron el escenario para la exclusión y marginación, antesala de la guerra, continuaron estando ahí latentes, reproduciéndose silenciosamente ante la mirada de la población, pero ahora acompañadas también por un pasado de violencia que ignora los reclamos de justicia de los sobrevivientes.

Es necesario generar procesos de investigación que permitan el reconocimiento de las memorias de mujeres que participaron con la guerrilla desde diferentes roles, registrando sus contribuciones, visiones y expectativas, mostrando los retos que enfrentaron al incorporarse a la vida civil a partir de los Acuerdos de Paz; acuerdos donde no se consideraron sus derechos y necesidades, dejándolas desarraigadas del territorio y de la historia. Es necesario evidenciar cómo a través de la construcción sociocultural de género se justifican las desigualdades que enfrentaron durante y después del conflicto, para poder reflexionar sobre los cambios sociales que se produjeron en el país a través de la vía democrática; las expectativas que se crearon con la llegada al poder del partido exguerrillero; conocer las deudas que aún siguen sin solventarse.

Por lo tanto, para generar las condiciones sociales, culturales y políticas que garanticen el respeto de la pluralidad de sectores poblacionales, es fundamental comenzar a generar las condiciones sistémicas que permitan la construcción de una cultura de paz, para contrarrestar las causas estructurales que han favorecido el acceso inequitativo a las condiciones de desarrollo y respeto de los derechos humanos. Solo cuando se inicie la modificación de patrones culturales que favorecen el uso de la violencia y la imposición de creencias y pautas de comportamiento dogmáticos, solo entonces se construirán relaciones desde la interseccionalidad que

permitan la inclusión y el establecimiento del diálogo como medio problematizador de la realidad. En la medida que la sociedad promueva condiciones para desarrollar un pensamiento crítico y reflexivo, se puede comenzar a crear formas alternas de vida en sociedad.

Para que el respeto a los derechos humanos sea posible, se debe cuestionar e interpelar los parámetros culturales; es en la cultura, en las prácticas, tradiciones y creencias de cada contexto donde se encuentran las respuestas a los puntos de inflexión. El diálogo intercultural necesita surgir desde relaciones de poder más equitativas, donde no se imponga de forma hegemónica el reconocimiento y aceptación de principios; al contrario, se necesita la generación de nuevos significados que sean contruidos con el otro y desde el otro.

El futuro de los derechos humanos requiere la construcción de nuevos patrones culturales que fomenten en las personas el desarrollo de habilidades sociales, afectivas, cognitivas y conductuales que los prepare para vivir en contextos de paz; el respeto de los derechos no llegará solamente por la vía política a través de la firma de acuerdos y creación de marcos normativos; solamente es posible transformar la realidad cuando las personas anhelan, sueñan y visualizan una vida diferente en sociedad, porque, primero, la paz debe existir en la imaginación de las personas para, después, poder traspasar las barreras culturales y crear condiciones que reconozcan y respeten la diversidad. La cultura de paz busca la inclusión, no la marginación ni la imposición; la paz necesita del desarrollo de mujeres y hombres en condiciones de igualdad. No puede existir paz si se niega y entorpece el aporte político de las mujeres.

Referencias bibliográficas

- Aguñada, D. (2001). Una mirada feminista sobre la participación de las mujeres en la guerra. El caso de El Salvador. En F. Reyso (ed.). *Hommes armés, femmes agueries* (105-116). Graduate Institute Publications. <https://doi.org/10.4000/books.iheid.6123>
- Arango, V. (2007). *Paz social y cultura de paz*. Panamá Viejo. <https://bit.ly/3zm57pa>

- Arbaiza, G. (20 de enero de 2012). 20 años de reclamos y sueños truncados. *Contrapunto*. <https://bit.ly/3zCyi7l>
- Bobbio, N. (2003). Teoría general de la política. *Teoría y realidad constitucional*, 12-13(2), 678-685. UNED. <https://bit.ly/3TF2pSv>
- Cifuentes, M. (2009). La investigación sobre género y conflicto armado. *Revista Eleuthera*, (3), 127-164. <https://bit.ly/4ehO4DF>
- Galtung, J. (1990). *Violencia cultural*. Centro de Investigación por la paz y Fundación Gernika Gogoratz. <https://bit.ly/3XZnc5V>
- Garrido, A. (2020). El papel de las mujeres en los Acuerdos de Paz en Colombia: la agenda internacional. *Revista Complutense Política y Sociedad*, 57(1), 77-97. <https://bit.ly/4dm4F8d>
- Guzmán, G. y Mendia, I. (2013). *Mujeres con memoria, activistas de los derechos humanos de El Salvador*. Hegoa. <https://bit.ly/3zyvMPs>
- Halbwachs, M. (2004). *Los marcos sociales de la memoria*. Anthropos.
- Jelin, E. (2002). *Los trabajos de la memoria*. Siglo XXI, S. A.
- Luciak, I. (1998). Mujeres en transición Izquierda revolucionaria, igualdad de género y democratización. Una comparación entre El Salvador y Nicaragua. *Revista de Estudios Centroamericanos*, 53(597-598), 619-641. <https://doi.org/10.51378/eca.v53i597-598.6369>
- Luciak, I. (2001). *Después de la revolución: igualdad de género y democracia en El Salvador, Nicaragua y Guatemala*. UCA.
- Malešević, S. (2015). La guerra y la teoría sociológica. *Revista Prohistoria*, XVIII(23), 3-19. <https://bit.ly/3Bn0AmT>
- Murguialday, C. (1996). Mujeres, transición democrática y elecciones. El Salvador en tiempos de posguerra. *Nueva Sociedad*, (141), 34-42. <https://bit.ly/4gIX0DV>
- Navas, M. (2007). Breve recorrido histórico de la participación de las mujeres en El Salvador. *Alternativas para el Desarrollo*, (105), 2-9. <https://bit.ly/4eocITd>
- Navas, M. (2013). *Desde su invisibilidad histórica y política hasta la incorporación de la perspectiva de género*. [Tesis doctoral, Universidad Autónoma de México]. <https://bit.ly/47HQFV2>
- Organización de las Naciones Unidas. (1993). *Informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador: De la locura a la esperanza*. <https://bit.ly/3zHe78b>
- Romero, V., Calderón, A. y Rincón, A. (2022). *La experiencia de las mujeres en revoluciones, levantamientos guerrilleros y conflictos armados*. Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica. <https://bit.ly/3zBNj9r>

- Scott, J. (1990). El género una categoría útil para el análisis histórico. *Op. Cit. Revista del Centro de Investigaciones Históricas*, (14), 9-45. <https://bit.ly/3TLhm5n>
- Secretaría Nacional de Comunicaciones. (1992). *Acuerdos de Chapultepec*. SENCO.
- Trimiño, C. (2014). Género(s) y educación: Aproximaciones al contexto de América Latina y el Caribe. *Revista Historia de la Educación Latinoamericana*, 17(24), 55-72. <https://bit.ly/3N71ITv>
- Trimiño, C. y Amézquita, L. (2018). Reflexiones desde la universidad sobre educación en derechos humanos y para la paz. *Revista Historia de la Educación Latinoamericana*, 20(31), 101-124. <https://bit.ly/4eE2uxW>
- Valdés, F. (2020). Derechos humanos, democracia y Estado en la tercera ola de la autocracia. *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, 65(239), 61-84. <https://bit.ly/3Zzlkkg>
- Vásquez, N., Ibáñez, C. y Murguialday, C. (2020). *Mujeres-Montaña: vivencias de guerrilleras y colaboradoras del FMLN*. Centro Cultural de España en El Salvador.
- Viterna, J. (24 de febrero de 2014). Mujeres en la guerra: Quiénes ganan, quiénes pierden. *El Faro*. <https://bit.ly/3XIV1H3>